



**Universidad**  
Zaragoza

## Trabajo Fin de Grado

# Derecho a la asistencia letrada del detenido, y la Reforma de la LECrim de 2015.

Autor:

María Catalán Bescós

Directora:

María Rosa Gutiérrez Sanz

Facultad de Derecho 2020

## ÍNDICE

### Introducción

- Cuestión tratada p.4
- Razón de la elección del tema y justificación de su interés. p.4
- Metodología. p.5

### El derecho a la asistencia letrada.

- Derecho fundamental de defensa, relacionado con el derecho de asistencia letrada. p. 6-10
- Esencia de la asistencia letrada. p.10
- El derecho a la asistencia letrada nace con la detención. p.11-14
  - Consideraciones generales como límite constitucional a la libertad personal p.11-14
  - Regulación de la detención. p.14
- Designación de abogado. p.14-16
- Contenido de la asistencia letrada. Las funciones del abogado. p.16
- Contenido de la asistencia letrada en sede policial. p.16-17

### Aspectos más relevantes de la Reforma de la LECrim.

- El derecho a la información en los procesos penales y el acceso al atestado policial. p.18-21
- El acceso a los elementos esenciales para impugnar la legalidad de la detención. p.21-22
  - I. El acceso al atestado policial p.22
    - Entrega del atestado y garantías procesales p.22
    - Forma de cumplimiento del atestado. p.23-26
- Entrevista reservada del detenido con su letrado. p.26-27
  - II. Su excepción la incomunicación. p.27-28
- Derecho al intérprete del detenido, y su influencia por la Unión Europea. p.28-31

Conclusiones. p .33-34

Bibliografía. P.35-36

## **ABREVIATURAS:**

|          |   |
|----------|---|
| - CE     | Constitución Española                               |
| - LO     | Ley Orgánica  |
| - LECrim | Ley de Enjuiciamiento Criminal                      |
| - PIDP   | Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos |
| - STC    | Sentencia del Tribunal Constitucional               |
| - TC     | Tribunal Constitucional                             |
| - TFUE   | Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea       |
| - CEDH   | Convenio europeo de Derechos Humanos                |
| - CDFUE  | Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea |
| - ART    | Artículo  |
| - FJ     | Fundamento jurídico                                 |
| - LOPJ   | Ley Orgánica del Poder Judicial                     |

## INTRODUCCIÓN

### Cuestión tratada.

En el siguiente trabajo vamos a tener la oportunidad de estudiar los derechos fundamentales de asistencia letrada al detenido, así como de las novedades que surgieron en nuestro ordenamiento con la Reforma de la LECRim a través de las leyes orgánicas 5/2015 de 27 de abril, y la ley orgánica 13/2015 de 13/2015 de 5 de octubre para la adaptación de las Directivas de la Unión Europea.

Los derechos de defensa y asistencia letrada son derechos fundamentales vigentes en la sección 1ª del capítulo II del título I de la Constitución española. La aplicación conjunta de los artículos 17.3 y 24.2 de la CE llevan a una doble proyección constitucional del derecho de asistencia letrada, en cuanto a su configuración legal, y en cuanto a su configuración constitucional. Y sólo interpretando ambos artículos conjuntamente, podremos llegar a obtener una comprensión de dicho derecho que, aunque no es originario de nuestra Constitución española, sólo en nuestro Estado de Derecho se da una redacción y definición tan extensa como la nuestra.

La esencia del derecho del detenido a la asistencia letrada se encuentra en la efectividad de la defensa, que le preste su apoyo y ayuda profesional en el momento de su detención, ya que es este acto y no las primeras diligencias policiales cuando nace para el detenido el derecho a disponer de abogado en el proceso penal.

### Razón de la elección del tema, y justificación de su interés.

El motivo por el cual elegí el tema de asistencia letrada para desarrollar mi trabajo de Final de Grado se debe a que durante las prácticas del Grado en Derecho en el despacho pude ver y experimentar la función que tenía el abogado en los procesos penales y su vital importancia a la hora de defender y asesorar a su cliente, siendo de tal grado mi curiosidad que quise buscar más información al respecto, ya que a mi pesar me resultó mi periodo de prácticas bastante corto por la satisfacción que tuve al realizarlas.

Considero de especial interés el tema elegido por el hecho de ser unas de las reformas más recientes de la LECrim, como bien he dicho antes son del año 2015, siendo un tema bastante actual y novedoso para la figura del detenido porque resultaba bastante necesario la adaptación de la ley de enjuiciamiento criminal a las medidas de la Unión

europea, así como de los convenios y tratados internacionales que había ratificado España en esta materia, mejorándose así las garantías procesales del detenido en los procesos penales.

### Metodología.

Para la elaboración del presente trabajo lo primero que tuve que hacer fue buscar dentro de la numerosa bibliografía que existe en esta materia, y en primer lugar, debo agradecer la labor de mi tutora por ayudarme a delimitar el objeto a través de la aportación que me hizo guiándome en que posibilidades tenía para poder acotar el objeto de mi trabajo. Una vez realizada dicha acotación, me dirigí a estudiar la materia de la asistencia letrada al detenido a través de libros, revistas, comentarios y sobre todo jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ya que, dichas sentencias me ayudaban a terminar de entender en ocasiones aquellos aspectos que me eran más costosos de comprender.

En cuanto a la metodología seguida en este trabajo se ha dividido en dos bloques diferenciados:

Una primera parte, de estudio jurídico de los derechos de asistencia letrada, y del derecho de defensa, dividida en apartados diferenciados para su estudio, siguiendo siempre para su investigación la legislación española, tanto la ley de enjuiciamiento Criminal, como la Constitución Española.

Y, una segunda parte, donde se ha seguido un procedimiento de análisis-jurídico sobre el estudio de las medidas innovadoras de la Reforma de la LECRim del 2015 articulada por las LO 5/2015 de 27 de abril, y la LO 13/2015 de 13/2015 de 5 de octubre, realizándose un resumen de dichas novedades más trascendentales para la normativa española, elaborando así un estudio detallado de las modificaciones realizadas.

## **I. DERECHO DE ASISTENCIA LETRADA.**

### **I.I Derecho fundamental de defensa, relacionado con el derecho de asistencia letrada.**

Los derechos de defensa y asistencia letrada son derechos fundamentales vigentes en la sección 1ª del capítulo II del título I de la Constitución española que se titula “De los Derechos fundamentales y las libertades públicas”.

Dichos derechos se encuentran así, dentro del cuadro recogido y protegido por la Constitución que le otorgan el valor de núcleo esencial de los derechos fundamentales, y con causa a ello les garantizan el máximo nivel de protección jurídica del capítulo IV “De las garantías de las libertades y derechos fundamentales”.

Respecto a la posible vulneración de estos derechos fundamentales, la vía de recurso que se interpone ante el Tribunal Constitucional es el recurso de amparo, procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.<sup>1</sup> Siendo los requisitos para interponer esta modalidad de recurso los siguientes: que se haya agotado previamente todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial, que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a un órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso, y finalmente, que en el proceso ordinario se haya invocado formalmente el derecho constitucional vulnerado.<sup>2</sup>

Se trata de un derecho doble de proyección constitucional,<sup>3</sup> por la aplicación conjunta del art. 17.3<sup>4</sup> y 24.2<sup>5</sup> de la CE, que guarda paralelismo con los textos internacionales

---

<sup>1</sup> Art.53.2 CE

<sup>2</sup> Art. 44 LOTC

<sup>3</sup> ARMANTA DEU.T, *Lecciones de Derecho procesal penal*, nº11 Marcial Pons, Madrid, 2018 P.66.

<sup>4</sup> Art.17.3 CE: “Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca”.

Como complemento a dicho artículo, el art.55.1 CE proclama que, aunque se declare un Estado de excepción, no podrá ser suspendido dicho derecho constitucional.

<sup>5</sup> Art.24.2 CE: “Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”.

sobre la materia suscritos por España (artículos 5 y 6<sup>o</sup> del Convenio Europeo de Derechos Humanos -CEDH-, y con los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos-PIDCP-)<sup>7</sup>, aunque la Constitución Española es más explícita en cuanto al aspecto material del derecho de asistencia letrada.

En efecto, el derecho de asistencia letrada se encuentra regulado en dos artículos diferentes en la CE pero ambos vinculados entre sí. El art. 17.3 de la CE garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y sumariales, mientras que el art. 24.2 de la CE lo hace en el marco de la tutela judicial efectiva con garantía del proceso debido.

La presencia de la asistencia letrada en las primeras diligencias policiales del art.17.3 CE se declara en varias Sentencias del Tribunal constitucional, reiterando así que su finalidad es la de asegurar con su presencia personal que los derechos constitucionales del detenido sean respetados, que no sufra coacción o trato incompatible con su dignidad y libertad en el acto de declaración, y que tendrá el detenido el debido asesoramiento técnico sobre la conducta a observar en los interrogatorios, incluida la de guardar silencio, así como su derecho a comprobar, una vez realizadas y concluidos con la presencia activa del Letrado, la fidelidad de lo transcrito en el acta de declaración que le presenta a la firma<sup>8</sup>. El alcance de este derecho se garantiza en todas las diligencias policiales y judiciales, pero no su ineludible asistencia a todos y cada uno de los actos instructores<sup>9</sup>. En particular, para los actos de instrucción que regula la ley son para la detención del art.520.5 de la LECrim, y para la práctica de la prueba anticipada.<sup>10</sup>

El derecho de defensa del art.24.2 CE, cumple un papel crucial en el proceso penal, está representado por las facultades y prerrogativas que tiene cualquier parte para hacer prevalecer su posición en el juicio penal, y al mismo tiempo es una de las garantías del

---

<sup>6</sup>Es numerosa la Jurisprudencia del Tribunal Europeo que ha nacido de dicho art.6 del convenio, siendo de reconocimiento la fama que ha tenido el Caso Deweer de la Sentencia de 27 de Febrero de 1980. En el caso, no hubo ni arresto ni inculpación, y la inspección que se realiza en la tienda del Sr. Deweer es consecuencia del protocolo de la época. La acusación no es más que una notificación de haber realizado una infracción penal por no seguirse la Ley de Bélgica de 1945 a 1971 sobre la reglamentación económica y los precios. Ante estos hechos, el Tribunal considera que hay una comisión de ilícito penal a partir del 30 de Septiembre de 1974, siendo entonces cuando el Sr. Deweer reclame que le correspondía haber tenido acceso a un Tribunal independiente e imparcial donde se le debiera de haber juzgado de forma justa sujeta a derecho.

<sup>7</sup> STC 21/2018, del 5 de Marzo FJ 4

<sup>8</sup> STC 21/1997, de 10 de Febrero FJ5, STC 196/1987 de 11 de Diciembre FJ 5, STC 252/1994, de 19 de Septiembre FJ 5

<sup>9</sup> STC 229/1999, de 13 de Diciembre FJ2

<sup>10</sup> STC 229/1999, de 13 de Diciembre FJ2, STC 206/1991, de 30 de Octubre, FJ 2

art.24.2 de la CE, es la garantía sobre la que giran las demás, de ahí su papel privilegiado dentro de las garantías procesales al detenido en los procesos penales.

1.Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley: El derecho al juez legal, es un derecho fundamental constitucional que garantiza a los ciudadanos que su causa sea conocida por un tribunal preexistente fijado por la ley previamente, para evitar que los intereses de los Jueces al caso particular puedan influir en el proceso, consiguiéndose así un resultado beneficioso para una de las partes.

Es garantía del proceso judicial que los jueces sean imparciales, porque sólo éstos tienen la objetividad necesaria para poder juzgar, además deberán de ser también jueces independientes que no se encuentren coaccionados por poderes políticos y extra políticos.<sup>11</sup>

2.Derecho a ser informado de la acusación formulada contra ellos. Este derecho supone que el detenido conozca de la acusación formulada contra él, para así poder defenderse de ella en la contradicción.<sup>12</sup>

3. Derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. En un primer momento, el Tribunal constitucional seguía la doctrina del Tribunal europeo de Derechos humanos cuando debía pronunciarse sobre el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas, siendo los criterios delimitadores de este concepto jurídico indeterminado los siguientes: complejidad del asunto, comportamiento del recurrente y de las autoridades nacionales, y las consecuencias del litigio para ellos. Hubo que esperar a la STC 223/1988 para obtener una definición un poco más aproximada de este concepto jurídico indeterminado, siendo para ello necesario concretar los plazos del proceso para cada caso en concreto siguiendo las siguientes circunstancias: complejidad del litigio, comparar la duración del litigio con otros del mismo tipo, el comportamiento de las partes del proceso y las circunstancias del órgano judicial actuante en el proceso.<sup>13</sup>

Por otra parte, en el mismo derecho nos encontramos con otro concepto jurídico indeterminado, derecho a un proceso público con todas las garantías. Es un derecho

---

<sup>11</sup> ARMANTA DEU T, Lecciones de derecho procesal ..cit., p.75

<sup>12</sup> STC 12/1981, recurso de amparo 96/1980, de 10 de abril de 1981.

<sup>13</sup> PERELLO DOMENECH I,<< Sobre el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas>>, *Jueces para la democracia*,ISSN,1133-0627, Nº39,2000,pp.16-20



complejo que intenta salvaguardar la presencia de ciertas instituciones específicas durante el proceso, y cuya ausencia supondría su vulneración.<sup>14</sup>

4. Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa Se trata de un derecho de configuración legal, unido al derecho de defensa, puesto que suponen los medios justificativos de las propias alegaciones del detenido que desvirtúan a la acusación cuyos límites se encuentran enunciados en el mismo precepto del art.24.2 de la CE.<sup>15</sup> Estos límites son tres, primero, la prueba tiene que ser pertinente, es decir, que tenga relación con el delito; segundo, cuando el precepto habla de defensa habla de derecho y esto quiere decir que deberán tratarse de pruebas lícitas para que sean admisibles, es decir, que no supongan un perjuicio ni sean contrarias a los derechos fundamentales; y por último, el verbo utilizar nos está indicando el momento procesal de cuándo deben presentarse y admitirse y, de cuando se tienen que realizar en el proceso penal, con carácter general la proposición de pruebas respecto al procedimiento ordinario por delitos graves debe hacerse en sus respectivos escritos de calificación<sup>16</sup>, la admisión<sup>17</sup> de las mismas será hecha por el Tribunal <sup>18</sup>,y finalmente, la práctica de dichas pruebas deberá efectuarse en el acto del juicio.<sup>19</sup>

1.5. Derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. El derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, así como el derecho a guardar silencio en el proceso<sup>20</sup>, están totalmente

---

<sup>14</sup> CALDERON CUADRADO M.P,<< El derecho a un proceso público con todas las garantías(aspectos controvertidos y Jurisprudencia del Tribunal Constitucional)>> *Cuadernos del Derecho público*, 1997-2007,nº10, p.6

<sup>15</sup> <https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/utilizar-medios-prueba-pertinentes-382082738> , fecha de consulta el 5 de abril de 2020.

<sup>16</sup> Art.656 LECrim

<sup>17</sup> STC 25/1997 precisa que el art.24.2 CE permite que un órgano judicial rechace un medio probatorio propuesto sin que ello lesione el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. El Juez únicamente admitirá aquellos medios probatorios que estime pertinentes, valorándolos libre y razonablemente, sin que pueda existir la posibilidad de que rechace las pruebas propuestas sin motivación .

<sup>18</sup> Art.659 LECrim

<sup>19</sup> El modo de practicar las pruebas durante el juicio oral es el capítulo III de la LECrim, y en ella se nombran cinco secciones diferentes de pruebas en el proceso:1ª De la confesión de los procesados y personas civilmente responsables, 2ª Del examen de los testigos, 3ª del informe pericial,4ª de la prueba documental y de la inspección ocular y 5ª disposiciones comunes a las cuatro secciones anteriores.

<sup>20</sup> ANTONIU ,G,Y COSTICA,B, *Diccionario de Derecho penal y de procedimiento penal*, Ed.Hamangiu, Bucarest,2011, p.300: “El derecho a guardar silencio fue definido por el derecho concebido para no responder a las preguntas relacionadas con la acusación. Este derecho no es posible cuando se requiera al detenido de una actuación cooperante en cuanto a las pruebas que constituyen una obligación legal, ya que las mismas tienen valor acusatorio.

relacionados con el principio de presunción de inocencia<sup>21</sup> y con el derecho de defensa, son manifestaciones de dicho derecho, y el detenido las ejerce en el proceso a través de su inactividad.

1.6 Derecho a la tutela judicial efectiva. Este derecho se encuentra regulado en el art.24.1 CE <sup>22</sup>y supone la garantía de libre acceso a la jurisdicción, siempre que exista un derecho o interés legítimo digno de tutela.

En la Sentencia del Tribunal Supremo nº56/2006, de 25 de Enero de 2006 se pronunció sobre este tema y declaró lo siguiente: “ El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva tiene un contenido completo que incluye su derecho de acceder a jueces y Tribunales, el derecho a obtener de ellos una resolución fundada en derecho y a su ejecución, y el derecho a que la pretensión deducida sea resuelta en el procedimiento prevista en la ley, sin que pueda incluirse en su comprensión un derecho a la obtención de una resolución acorde a la pretensión deducida.”

## **1.2 La esencia de la asistencia letrada al detenido.**

Es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que el derecho a la asistencia letrada se satisface con la asistencia técnica y apoyo moral de cualquier abogado.<sup>23</sup> La esencia del derecho del detenido a la asistencia letrada es preciso encontrarlo, no en la modalidad de la designación del abogado, sino en la efectividad de la defensa, pues lo que quiere la Constitución es proteger al detenido con la asistencia técnica de un letrado, que le preste su apoyo moral y ayuda profesional en el momento de su detención.

---

<sup>21</sup> En el plano internacional son varios textos que consagran el principio de presunción de inocencia: La Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano ( 1789), padre fundador de dicho principio “ Presumiéndose inocente a todo hombre hasta que haya sido declarado culpable, si se juzga indispensable arrastrarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona debe ser severamente reprimido por la ley”; La Declaración Universal de Derechos, (1948) en su art. 11:“ Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”; y por último, la ONU, el 16 de Diciembre de 1966, escribió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art.14: “ Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.

<sup>22</sup> Art.24.1 CE:” Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los tribunales y jueces en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.”

<sup>23</sup> STC 29/1995, STC 196/1987, FJ 5

### **I.3 El derecho a la asistencia letrada nace con la detención.**

Todo detenido tiene derecho a disponer de un abogado<sup>24</sup>, por lo que será obligatorio el disponer de abogado desde el momento en que se haya detenido<sup>25</sup> al sujeto, y se mantendrá a lo largo de todo el proceso.<sup>26</sup>

#### **Consideraciones generales sobre detención preventiva como límite constitucional a la libertad personal.**

En un Estado Social y Democrático de Derecho la libertad personal tiene dos valores diferentes, el primero en cuanto a valor superior del Ordenamiento jurídico proclamado en el art.1.1 de la CE<sup>27</sup>, y otro, en cuanto derecho fundamental consagrado en el art.17.1 de la CE<sup>28</sup>, presupuesto de las demás libertades y derechos fundamentales.

El derecho a la libertad personal del art. 17.1 de la CE establece que se podrá privar de libertad siempre que se sigan las formalidades previstas en el apartado 2 y 3 de dicho artículo, además de las condiciones y plazos que la ley impone, siendo uno de sus rasgos característicos los límites temporales de la detención preventiva regulados en el apartado dos del mismo artículo 17 de la CE<sup>29</sup>, y del cual podemos extraer las siguientes conclusiones sobre el límite temporal de la detención preventiva<sup>30</sup>:

- En primer lugar, existe un límite temporal relativo, ya que, el precepto constitucional no especifica el tiempo concreto que puede durar dicha detención, sino que la condiciona al tiempo necesario para realizar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.

---

<sup>24</sup> Art.520.c) LECrim: Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del art.527 LECrim y a ser asistido sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquel, salvo que dicha comunicación sea imposible.

<sup>25</sup> Art.767 LECrim: Desde la detención o desde que de las actuaciones resultare la imputación de un delito contra persona determinada será necesaria la asistencia letrada. La Policía Judicial, el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial recabarán de inmediato del colegio de Abogados la designación de un abogado de oficio, si no lo hubiera nombrado ya el interesado.

<sup>26</sup> La Fiscalía General del Estado ha sostenido en la resolución de la consulta núm. 4/85 que el derecho a la asistencia letrada nace con la detención.

<sup>27</sup> Art.1.1 CE: España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

<sup>28</sup> Art.17.1CE: Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma prevista en la ley.

<sup>29</sup> Art.17.2 CE: “La detención privativa no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto a libertad o disposición de la autoridad judicial”.

<sup>30</sup> STC 224/2002,25 de Noviembre FJ4

- Segundo, existe un límite temporal absoluto, que sí marca el plazo máximo que puede durar la detención que no son más de setenta y dos horas, las cuales comienzan a computar a efectos procesales una vez se dé el inicio de la detención.

Una vez que, dichos límites temporales han concluido, o bien se haya producido el límite temporal relativo, o bien se haya cumplido las 72 horas desde que se le detuvo, el detenido deberá o bien ser puesto en libertad o a disposición judicial. Por otro lado, existe la posibilidad en el caso contrario de que, si aun habiéndose computado las 72 horas y no se hayan podido culminar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, será entonces cuando deba de ingresar en prisión provisional.

En todo caso, se le deberá de informar al detenido del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detención.<sup>31</sup>

Es bastante chocante la aparente contradicción entre el plazo máximo de duración de la detención preventiva de 24 horas del art.496 LECrim<sup>32</sup>, y el art.17.2 CE, cuyo plazo máximo acabamos de explicar. Existen al respecto dos teorías<sup>33</sup> en la doctrina, cuestión bastante polémica , sobre cuál es el plazo máximo establecido:

- El art.496 de la LECrim, ley del año 1882, siendo un artículo preconstitucional quedaría derogado tácitamente por el art.17.2 de la CE del año 1978, además el art.520.1 de la LECrim<sup>34</sup> vuelve a ratificar este plazo máximo en 72 horas.
- Mientras que la segunda teoría opta por el plazo máximo de 24 horas del art.496 LECrim más beneficiosa respecto a la integridad del derecho fundamental de la libertad, basándose en que el art.17.3 de la CE establece un tope máximo de 72 horas que no tiene obligación el legislador de agotar.

<sup>31</sup> Art. 520.2 LECrim

<sup>32</sup> Art.496 LECrim:” El particular, la autoridad o agente de policía judicial que detuviere a una persona en virtud de lo dispuesto en los precedentes artículos, deberá ponerla en libertad o entregarla al juez más próximo del lugar en que hubiere hecho la detención dentro de las 24 horas siguientes al acto de la misma.”

<sup>33</sup> BUJOSA VADEL ,L, <<Imputación y detención policial: perspectiva española>>, *Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política*, ISSN 0719-2150, vol.3, nº2, pp.10-11

<sup>34</sup> STC 107/1995, de 3 de Julio, Art.520.1 LECrim: “Dentro de los plazos establecidos en la presente ley, y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial”.

En la práctica la teoría que se sigue el Tribunal Constitucional es la primera de estas, siguiendo lo establecido en el art.17.2 CE con un plazo máximo de la detención preventiva en 72 horas<sup>35</sup>.

Esta regulación de la detención preventiva ordinaria ve su excepción en los supuestos de delitos de terrorismo o bandas armadas, donde el art.55.2 de la CE permite la suspensión individual de los derechos, y con ello la suspensión de las garantías de la detención preventiva, y pudiendo ser prorrogada hasta un límite máximo de 48 horas, siempre que haya sido solicitada la prórroga dentro de las primeras 48 horas mediante comunicación motivada, y autorizada en las 24 horas siguientes.<sup>36</sup>

Mediante el procedimiento del “Habeas Corpus”, regulado en la LO 6/1984 de 24 de Mayo, se podrá obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente, de cualquier persona detenida ilegalmente.<sup>37</sup> Se consideran personas detenidas ilegalmente a efectos del art.1 de esta Ley Orgánica las siguientes:

- Las que fueran detenidas por las autoridades sin concurrir los supuestos legales o cumplir las formalidades o requisitos exigidos por ley.
- Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento.
- Las que habiéndose superado el plazo superior, no hayan sido puestas en libertad, o al juez más próximo al lugar de detención.
- Aquellas que privadas de libertad no les sean respetados los derechos constitucionales, y los que garantizan las leyes procesales.

Por último deberíamos preguntarnos, ¿Cuál es la justificación de la detención preventiva? Es una medida cautelar de investigación policial<sup>38</sup>, previa al proceso judicial, cuyo fin en sí mismo, son las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de un hecho presuntamente delictivo. Por tanto, existe una doble obligación estatal<sup>39</sup>:

- Primero, deber estatal de prevenir y perseguir eficazmente el delito.

---

<sup>35</sup> SSTC 224/2002, de 25 de Noviembre FJ3; 31/1996, de 27 de Febrero, FJ8

<sup>36</sup> Art.520.1 Bis LECrim, STC 199/1987, de 16 de Diciembre FJ5

<sup>37</sup> Art.17.4 de la CE

<sup>38</sup> Art.126 CE: “La policía judicial depende de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca”.

<sup>39</sup> FREIXES SANJUAN, T,Y REMOTTI CARBONELL, J.C, *El derecho a la libertad personal, análisis de constitución, legislación, Tratados internacionales y Jurisprudencia( Tribunal Europeo y Tribunal constitucional)* , Ed.Promociones y publicaciones universitarias PPU,España,1993 p.10 y ss.

- Deber estatal de asegurar el ámbito de libertad del ciudadano, ya que mediante la satisfacción de este fin se pueden garantizar otros bienes constitucionales como la paz social y la seguridad ciudadana consagrados en los arts.10.1<sup>40</sup> y 104.1<sup>41</sup> de la CE.

Quienes acuerden la medida y los encargados de practicarla<sup>42</sup> así como los traslados ulteriores, velarán por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquellos, con respeto al derecho fundamentales a la libertad de información.

#### Regulación de la detención.

La detención encuentra regulada en España en el Título VI del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que comprenden los artículos 489 a 501.

#### **I.4 DESIGNACIÓN DE ABOGADO.**

El detenido tiene derecho, a designar abogado desde el momento de su detención privativa, por lo que para abordar esta cuestión será necesario volver al art.520.2.c), y al art.118.1.d) <sup>43</sup>ambos de la LECrim.

Siguiendo este mismo artículo, en su apartado 5, se encuentran las dos modalidades de defensa jurídica<sup>44</sup>:

- De forma general el interesado puede encomendar su representación y asesoramiento técnico a quien merezca de su confianza<sup>45</sup> y considere más adecuado para instrumentar su propia defensa, por lo que nos lleva a entender que

<sup>40</sup> Art.10.1 CE:” La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.”

<sup>41</sup> Art.104.1 CE: “Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.”

<sup>42</sup> Art.494 LECrim: “Dicho juez o Tribunal acordará también la detención de los comprendidos en el artículo 492, a prevención con las autoridades y agentes de Policía Judicial.”

Art.118.1.d) LECrim:” Toda persona a quien se le atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá, sin demora injustificada de los siguientes derechos: d) Derecho a designar libremente abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 a) del art.527.”

<sup>44</sup> Art. 520.5 LECrim:” El detenido designará libremente abogado y si no lo hace será asistido por un abogado de oficio.”

<sup>45</sup> Art.545.1 LOPJ: “Salvo que se disponga de otra cosa, las partes podrán designar libremente a sus representantes entre los procuradores y abogados que reúnan los requisitos exigidos por las leyes.”

la libre designación de éste viene integrada en el ámbito protector del derecho constitucional de defensa jurídica.<sup>46</sup>

- También será posible la asistencia de turno de oficio cuando se cumpla con los requisitos del art.119 de la CE: “La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Si los poderes públicos no prevén al justiciable de la adecuada asistencia letrada, la ausencia de abogado será valorada como una lesión del derecho constitucional de defensa.” Pero además, se le deberá designar abogado de oficio cuando el detenido no lo designe, o se niegue a hacerlo.<sup>47</sup>

También, no nos podemos olvidar, que el detenido, aunque no haya ejercitado su derecho a ser asistido por un letrado, en las actuaciones que requieran la intervención de uno, como son la declaración del detenido y el reconocimiento de identidad en las diligencias policiales, se pondrá a su disposición en dichos casos de un abogado de oficio.<sup>48</sup>

En la jurisdicción penal, debido a que la intervención del letrado es obligatoria en el proceso penal para la defensa del detenido, no se puede perjudicar la defensa técnica de dicho detenido por la capacidad económica que éste tenga, ya que dicha defensa técnica es requisito imprescindible y necesario en todos los procesos penales.

La autoridad que custodie al detenido comunicará inmediatamente al colegio de abogados el nombre del designado por el detenido para asistirle o le comunicará la petición de nombramiento de abogado de turno de oficio.

El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima premura, siempre dentro del plazo máximo de 3 horas desde la recepción del encargo. Si no compareciera en el mismo, el Colegio de Abogados designará un nuevo abogado de turno de oficio,

---

<sup>46</sup>STC 821/2016, de 2 de Noviembre: Faculta como regla general al cambio de letrado cuando se ha perdido la confianza en él el detenido, o bien desee renunciar al abogado de oficio y quiera designar un nuevo abogado de confianza. Pero, este derecho no es ilimitado, pues el Tribunal tiene la obligación legal de rechazar las solicitudes de cambio de abogado cuando tengan como fundamento el abuso de derecho, siendo su petición arbitraria, es decir, inmotivada o motivada de forma irrazonable.

<sup>47</sup> Art. 545.2 LOPJ: “Se designarán de oficio, con arreglo a lo que en aquellas se establezca, a quien lo solicite o se niegue a nombrarlos, siendo preceptiva su intervención. La defensa de oficio tendrá carácter gratuito para quien acredite insuficiencia de recursos para litigar en los términos que establezca la ley.”

<sup>48</sup> MIRA ROS, C., <<El derecho del acusado a defenderse por sí mismo a la luz de la Constitución Española y de los instrumentos Internacionales ratificados por España>>. *Revista General de Derecho Procesal*, ISSN-e 1696-9642, núm. 15, 2008. Pp. 3-4.

que deberá comparecer en idéntico plazo, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad disciplinaria en que haya incurrido el compareciente.<sup>49</sup>

### **1.5 CONTENIDO DE ASISTENCIA LETRADA.**

La asistencia de abogado consistirá en<sup>50</sup>:

- a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos comprendidos en el art.520.2 LECrim, y que se proceda si fuera necesario a su reconocimiento médico.
- b) Intervenir en las diligencias de declaración del detenido, en los de reconocimiento que sea objeto y en las de reconstrucción de los hechos en que participe el detenido, pudiendo instar cuando termine que consten en el acto los extremos que considere convenientes
- c) Informar al detenido de las consecuencias de prestación o denegación de su consentimiento a la práctica de las diligencias que soliciten.
- d) Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba la declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial.

### **1.6 CONTENIDO DE LA ASISTENCIA LETRADA EN SEDE POLICIAL.**

Una vez, que ya hemos visto la sistemática del art.520.6 LECrim en el apartado anterior, y partiendo de la declaración que realiza el detenido, podemos distinguir tres momentos procesales diferentes en cuanto a la asistencia letrada en la sede policial<sup>51</sup>:

- Antes de la declaración, tanto el detenido como su abogado tienen derecho a que se les informe de las razones por las que se ha visto privada de su libertad al detenido, así como de conocer los hechos que le imputan en dicho proceso, como de los derechos que le corresponden como tal, y que los mismos hayan sido debidamente comprendidos<sup>52</sup>. Además, dicho letrado podrá comunicarse con su detenido en una entrevista reservada que será previa a la declaración en sede policial. Y, si el detenido no comprendiera el castellano o la lengua oficial de

---

<sup>49</sup> Art. 520.5 LECrim

<sup>50</sup> Art.520.6 LECrim

<sup>51</sup> <https://alvarezabogadostenerife.com/2019/02/asistencia-detenido-sede-policial-judicial/> , consulta realizada el 17 de julio de 2020.

<sup>52</sup> Art.520.2 LECrim



actuación de que se trate tendrá derecho a disponer de intérprete para que así no se encuentre en una situación de vulneración por desconocimiento del idioma.

- Durante la toma de declaración, el abogado deberá asegurarse que se respetan en todo momento los derechos contenidos en el art. 520.2 LECrim.
- Tras la declaración en sede policial, el detenido vuelve a tener derecho a entrevistarse reservadamente con su abogado. Además, podrá ampliar la declaración del detenido con todas las incidencias que vayan sucediendo que consideren relevantes para el contenido de ésta, así como la posibilidad de recibir la copia del atestado cuando sea el modo más efectivo posible para garantizar los principios de contradicción y de igualdad de armas en el proceso.

## **II.ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA REFORMA DE LALECRIM**

El punto de partida de las actuales Directivas de la Unión Europea se encuentra en el Programa de Estocolmo de 2009, en cuya premisa se recogía el lema “Hacia una Europa de los ciudadanos en un Espacio de libertad, seguridad y justicia”.

La prioridad consistía en crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, donde su fin era asegurar el respeto de los derechos y de las libertades fundamentales y la integridad de la persona. Se pretendía conseguir con dicho Programa un plan de confianza mutua entre las autoridades de los diversos Estados miembros para desarrollar una armonización mínima de las principales garantías procesales de los derechos de los detenidos.<sup>53</sup>

Gracias a las Directivas de la Unión Europea, nuestro ordenamiento jurídico consiguió dar un giro de 180ª para proteger y reforzar los derechos fundamentales constitucionales del art.17 y 24 de la CE a los detenidos en los procesos penales.

En este trabajo Final de Grado me interesa resaltar las dos Leyes Orgánicas que lograron un antes y un después en nuestro texto legal. Por un lado, la Ley Orgánica 5/5015 de 27 de abril, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley

---

<sup>53</sup> GARRIDO CARRILLO, FJ Y GAGGIANI V., << El plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de los sospechosos o acusados en el proceso penal y el programa de Estocolmo: Hacia una Europa de la ley y de los Derechos fundamentales en el ELSS>>, *comunicación presentada en el Congreso sobre la Convergencia entre los procesos civil y penal, ¿ Una buena dirección? Análisis comparado*, Girona, enero de 2012 p.11

Orgánica 6/1985 del Poder Judicial que traspone la Directiva 2010/64/UE de 2010 sobre el Derecho de interpretación y traducción en los procesos penales, y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de Mayo, relativa al derecho de información en los procesos penales; y por otra parte, la LO 13/2015, de 5 de Octubre, que modifica la LECrim y refuerza las garantías procesales.

## **II.1 El derecho a la información en los procesos penales y el acceso al atestado.**

El derecho a la información, es un derecho fundamental del detenido que se encontraba ya regulado en los Tratados Internacionales, y en el Convenio de la Unión Europea.

Centrándonos en el ámbito de la Unión Europea, citaremos el art. 6.3 y el 5.2 del CEDH que formula respecto a este derecho de información lo siguiente:

El art.6.3 del CEDH: “Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:

- a. A ser informado, en el más breve plazo en una lengua que comprenda y de manera detallada, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él.
- b. A disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa”

El art.5.2 del CEDH: “Toda persona detenida preventivamente debe ser informada en el más breve plazo y en una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella”.

Al realizar la lectura de los artículos anteriores se puede ver como se repiten los términos “de forma inmediata”, o “ lenguaje comprensible”, siendo por tanto, elementos imprescindibles de dicho derecho la celeridad y la asequibilidad. Las autoridades tanto de la policía, como de la autoridad judicial son los encargados de poner a disposición dicha información a lo largo de todo el proceso penal que se esté realizando al sujeto pasivo en cuestión, es decir, al detenido. Es entonces una obligación de las autoridades, y su ausencia lleva consigo una vulneración de dicho derecho fundamental constitucional, al verse el art.17.3 de la CE vulnerado por dicha omisión.

Entonces, llegados a este punto, debemos de preguntarnos la siguiente cuestión, ¿De qué ha de informarse al detenido?

Para responder a esta pregunta debemos tener en cuenta, que el derecho a la información es presupuesto necesario y fundamental del derecho de defensa, es decir, sin la posibilidad de conocer los hechos que se le imputan al detenido, y las razones por las cuales se ha visto privado de su libertad, difícilmente podría defender su libertad y su inocencia en un proceso judicial donde se encuentren garantizadas los principios de igualdad y de contradicción.

Volviendo otra vez a la cuestión que hemos planteado, se tratará entonces de darle la información necesaria, de la forma más concreta y exacta posible de los hechos fácticos que se le atribuyen, así como de los datos objetivos que permiten establecer una conexión lógica entre la conducta del detenido y el hecho investigado. Además deberá de informarse el motivo por el que se ha elegido la medida cautelar de la detención preventiva, y no otra de menor entidad.<sup>54</sup>

En cuanto a las reformas de los textos anteriormente citados, la Ley Orgánica 5/2015 del 27 de Abril, traspuso la Directiva 2012/ 13/ UE del 22 de Mayo donde para poder adaptar la legislación española a dichas disposiciones supranacionales debieron de modificarse los artículos 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Directiva 2012/13/UE del 22 de Mayo del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho a la información en los procesos penales tenía como objetivo conseguir un mínimo común entre los Estados de la Unión, excepto Dinamarca, donde los sospechosos y acusados vieran garantizadas sus derechos procesales en cuanto a la información que debieran de recibir en los procesos penales.

La Directiva a lo largo de su disposición regula un conjunto de derechos de información, denominados:

---

<sup>54</sup> En la STC 21/2018, de 5 de Marzo. Las autoridades policiales debían haber justificado el aviso sobre la existencia de una pelea entre jóvenes, el hecho de la coincidencia de la edad, y que uno de los agentes hubiese presenciado como uno de ellos arrojaba el machete mientras intentaba huir, al no justificarlo son meros indicios, indicios que no se han plasmado en un documento público que es la información que se tiene que entregar efectivamente al detenido para que este pueda poder comprender la situación, los hechos, el delito y así poder defenderse en el proceso, son meras sospechas al fin y al cabo. Y esto nos lleva a la afirmación, porque entendemos que se han incumplido y vulnerado también el derecho a la información que tiene el sospechoso o acusado sobre la acusación del hecho ilícito penal.

- Derecho a recibir información sobre los derechos que le asisten al detenido, como al sospechoso o acusado, artículo 3.
- Derecho a recibir la declaración sobre los derechos en el momento de la detención, artículo 4.
- Derecho a recibir información sobre la acusación particular, artículo 6.

El derecho a recibir por escrito una declaración de los derechos que le asisten al detenido se encuentra regulado en el artículo 4 de la Directiva, y se deberá acudir a lo enunciado en el artículo 5 cuando haya sido detenido conforme a la ejecución de una orden de la detención europea.

La diferenciación entre las personas detenidas o sospechosas en la Directiva se debe por el modo de entregar la información, porque mientras para los sospechosos dice el artículo 3.2 que puede realizarse o bien de forma verbal, o bien de forma escrita, con lenguaje sencillo y accesible en donde se tengan en cuenta las necesidades individuales de cada sujeto, ya que no todos los detenidos tienen los mismos estudios, ni conocimientos, pero ni tampoco la misma edad, estas circunstancias personales son las que habrá que tener en cuenta en el momento en que la autoridad le explique los derechos que les corresponden por el mero hecho de ser sospechosos en un proceso penal. A diferencia de los detenidos, que como bien podemos ver en el art. 4.1 de la Directiva la declaración se hace de modo escrita, en términos sencillos y accesibles, siendo su declaración de derechos impresa, más extensiva de la del artículo 3 y teniendo la posibilidad de conservarla durante todo el tiempo que dure la privación de libertad, además de darle la posibilidad de leerla.

Los Estados miembros deben garantizar que a la persona detenida se le entregue una declaración escrita en un lenguaje que comprenda, y si no es posible realizarla en un idioma apropiado, se le informará oralmente al detenido en una lengua que sí comprenda.

En el art. 4.2 además de la información que debe de entregarse de forma general a toda persona sospechosa o acusada del art. 3 apartado 1, deberá de contener la declaración y además los siguientes derechos:

- a. Derecho de acceso a los materiales del expediente.
- b. Derecho a informar a las autoridades consulares y a una persona concreta.

- c. El derecho de acceso a atención médica de urgencia.
- d. Derecho a recibir información sobre el máximo de números de horas o de días que una persona sospechosa o acusada puede estar privada de libertad antes de ser llevada ante una autoridad judicial,
- e. Derecho a recibir información sobre las formas de impugnación de la legalidad de la detención, obtención de una revisión de la misma o solicitud de libertad provisional.

Dicha Directiva, se regula en su artículo 6, un conjunto de derechos, recogidos bajo el nombre de “Derechos a recibir información sobre la acusación”. El alcance de dicho Derecho es diferente según la de fase procesal en la que se encuentre el sujeto pasivo, en nuestro trabajo a referirnos al detenido de forma exclusiva, nos interesa el art. 6.2, donde hace mención expresa del detenido, y regulando así que toda persona que se encuentre privada de libertad o detenida, los Estados miembros deberán de garantizarle la información sobre la sospecha de que ha cometido un ilícito penal, o de la causa de la que se le acusa.

El momento en el que los Estados deben garantizar dicha información al detenido se encuentra en los apartados siguientes del mismo artículo 6. Y, como bien nos dice el apartado 3, a más tardar en el momento en el que el contenido de la acusación se presente a un Tribunal. También, es muy importante el artículo 6.4 para que pueda ejercer su defensa, ya que a lo largo del proceso cuando la investigación se encuentra en curso es posible que cambien la calificación jurídica de los hechos imputados, y por ello, la efectividad en la práctica de dicho artículo en cuestión, ya que debe de garantizarse con prontitud los cambios que puedan surgir, asimismo de que se debe redactar de forma clara, enfatizando y haciendo referencia a que se trata de un tipo de información que debe de entregarse a nuestro detenido .

#### **II.1.2 Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.**

La conexión que existe entre el derecho a la información de las razones por las cuales se ha llevado a la detención del detenido, y el de acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención es lo que lleva al detenido a solicitar aquella parte de las actuaciones que documente las razones aducidas.

El significado y alcance que debe darse a la interpretación tiene que considerarse como esencial, debe partir de la idea de principio de primacía del derecho comunitario y en control de convencionalidad, ya que los Tribunales españoles tienen que respetar la legislación de la Unión europea por su carácter supranacional para todos los Estados miembros.<sup>55</sup>

La LO 5/2015, de 27 de Abril incorporó a la LECRim el art. 520.2.d) “el derecho de acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad”, para así adaptarse a lo dictado por la Directiva 2012/13/UE de 22 de Mayo de 2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho a la información en los procesos penales.

### **II.1.2.3 El acceso al atestado policial**

Uno de los aspectos fundamentales de la reforma fue precisamente este apartado, el de la posibilidad por parte del abogado al acceso al atestado.

El término de atestado en términos generales corresponde con la definición de documento oficial de naturaleza administrativa que contiene una serie de diligencias practicadas por los funcionarios policiales para el esclarecimiento de un hecho delictivo, a fin de determinar las circunstancias concurrentes en el mismo y la posible responsabilidad de las personas implicadas en concepto de autor, cómplice o encubridor.<sup>56</sup>

#### **Entrega de los atestados y garantías procesales**

##### **-Naturaleza y función del documento en los procesos penales.**

Es doctrina consolidada del atestado en el Tribunal Constitucional que el valor del atestado es de denuncia, y solo puede darse valor de prueba si en el juicio oral a través de la declaración testifical de los agentes de policía es reiterada y ratificada siempre que sea por los policías que firmaron el mismo.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> <https://elderecho.com/que-se-entiende-por-documentos-esenciales-para-impugnar-la-legalidad-de-la-detencion> , consulta realizada el 15 de abril de 2020.

<sup>56</sup> <https://teleoposiciones.es/wp-content/uploads/2019/10/TEMA-27-EL-ATESTADO.pdf> 10/05/2020

<sup>57</sup> Con carácter general se le da valor de prueba testifical, es decir, es una denuncia, no se le puede otorgar valor de prueba ( STC 173/1997 de 14 de Octubre de 1997 FJ 2) En la STC 21/2018, de 5 de Marzo no se le otorga el valor de auténtica prueba lícita en derecho, y por tanto no es suficiente como para inculpar al presunto sospechoso, Wander Suero, sin embargo, si los agentes hubieran ratificado su

Podemos constatar lo dicho hasta ahora a través del valor probatorio, que otorga la doctrina constitucional a la declaración testifical cuando ha sido ratificada en el juicio oral con posibilidad de debate contradictorio, y bajo publicidad, siempre y cuando, se encuentre un juez imparcial presente.<sup>58</sup>

#### -Forma de cumplimentación del atestado

Con la Directiva de la Unión Europea del 2012/13/ UE, de 22 de Mayo realizó un cambio en cuanto que supuso que permitieran al abogado la posibilidad de obtener las copias de la denuncia del detenido, regulado en el art. 520.1 de la LECrim, para así saber cuánto tiempo llevaba privado de libertad su cliente, y dar fe de la legalidad de la detención.

Originariamente, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( LECrim) no establecía nada al respecto, pero en la práctica lo que sucedía era que, la autoridad policial se le mostraba al abogado el atestado, antes de que se entrevistase con el detenido, si finalmente esto no sucedía se veía mermada la asistencia letrada, y resultando consecuentemente perjudicada su mecanismo de defensa.

La ley orgánica 5/ 2015 del 27 de abril traspuso a nuestro ordenamiento interno de la Directiva 2012/ 13/ UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de Mayo de 2012, relativa al derecho de información en los procesos penales, y gracias a ella hubo un antes y un después en la legislación en cuanto al acceso al atestado policial.

Aunque no fueron pocas las polémicas que surgieron a raíz de la interpretación que se hizo de la Directiva en nuestro ordenamiento, ya que era un poco abstracto y fueron varias las soluciones que los juristas plantearon al respecto.

Se encuentra regulado en el art.7 de la misma bajo el título “ Derecho de acceso a los materiales del expediente”, y con dicho artículo se pretendía conseguir los siguientes objetivos:

---

declaración en el juicio oral o en la fase de instrucción bajo presencia judicial sí que le hubiera dado valor de prueba el Tribunal y hubiera sido más que suficiente como para poder afirmar que realmente era culpable del delito.

<sup>58</sup> STC 31/1981, de 28 de Julio, FJ4

1. Los Estados miembros deberían garantizar que o bien al detenido, o bien a su abogado se le dieran los documentos relacionados con el expediente para poder así impugnar la legalidad de dicha detención.
2. Además no solo se garantiza el derecho al acceso al atestado, sino también a las pruebas materiales que se encuentren bajo la autoridad competente, sin más tardar cuando la acusación presente sus motivos ante el Tribunal.
3. El acceso al atestado y a las pruebas materiales de forma gratuita.

Por lo tanto, mientras el abogado no pueda acceder a dicho atestado no puede ejercer la defensa de su detenido. Con este reconocimiento del derecho de acceso a los materiales del expediente se permite impugnar la ilegalidad de la detención bajo el amparo de la ley, y solo podrá ser denegado como dice el mismo art.7 de dicha Directiva cuando se corra el riesgo de perjudicar una investigación en curso, cuando se pueda menoscabar gravemente la seguridad nacional del estado miembro, si el acceso a dichos materiales puede suponer una amenaza grave para la vida o los derechos fundamentales de otra persona.

Una vez solicitado el acceso se deberá entrar en él de la forma más segura posible, a través de un modo que permita al detenido o a su letrado comprobar las bases objetivas de su privación de libertad, ya sea a través de la exhibición de dicho documento, o directamente de la entrega.<sup>59</sup> Se podrá activar el mecanismo de la garantía del habeas corpus cuando haya discrepancia en la autoridad policial de qué elementos son los esenciales, y será entonces cuando las autoridades judiciales diriman la controversia.

La trasposición de ese Derecho a nuestro texto normativo procesal penal, ha llevado a la STC 13/2007 a aclarar el art.7 de la Directiva. Dicho artículo tiene efecto directo y es obligatorio para los Estados miembros de la Unión Europea, como bien se recoge en el precepto de la obligatoriedad en el art.7.1.<sup>60</sup> Siguiendo lo establecido en este artículo, y

---

<sup>59</sup> En la STC 21/2018, en los antecedentes vemos como las palabras del Señor Wander Suero respecto al acceso al atestado policial son las siguientes “ Mi abogado ha solicitado acceder a las diligencias practicadas para examinar los elementos que justifican la legalidad de mi detención y le han negado ver o examinar el atestado, con vulneración del art. 520 LECrim, limitándose indebidamente a conocer las razones de su detención.

<sup>60</sup> Art. 7.1 de la Directiva 2012/13/UE: “ Los Estados miembros garantizaran que se entregue a la persona detenida o a su abogado aquellos documentos relacionados con el expediente específico que obren en poder de las autoridades competentes y que resulten fundamentales para impugnar de manera efectiva, con arreglo a lo establecido en la legislación nacional, la legalidad de la detención o de la privación de libertad.



en el art. 82.2 del TFUE,<sup>61</sup> las autoridades nacionales no pueden hacer una interpretación del art.520.2.d) que vaya en contra de la literalidad de la norma de la Unión Europea.<sup>62</sup>

La trasposición de dicha Directiva a nuestro Estado, hizo que se modificara el art. 520 de la LECrim, y se creará el apartado 520.d) de la Ley de Enjuiciamiento criminal (LECRim) redactándose de la siguiente manera “ Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad”.

Salvo que se acuerde la declaración judicial del secreto de las actuaciones, la LO 13/2015 del 27 de Abril redactó el art. 302 de la LECRim de la siguiente manera: “ Las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento”, por tanto, el abogado del detenido podrá tener acceso al atestado, salvo que se dicte secreto de sumario en la declaración judicial.

Vigente ya la LO 5/2015, de 27 de abril, la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, el 15 de Julio de 2015, estableció lo que se debía de considerar contenido mínimo que había que entregar a todo detenido, fijando como datos imprescindibles de la información policial la hora, la fecha y el lugar<sup>63</sup> en donde se había cometido el delito, así como la detención que hubiera tenido lugar después, tanto el hecho delictivo, asimismo los indicios de los que se cree que haya participado el detenido. Dicho de otro modo, lo que se pretende es dejar constancia por escrito de la forma más completa posible todos los hechos relevantes del delito, y cuyo fin supone facilitar la impugnación de la detención.

De tal contenido deriva que el atestado pueda recoger más información sobre la investigación del hecho delictivo, ya que puede haber referencia a él, como a terceras

---

<sup>61</sup> Art. 82.2 TFUE: “ En la medida en que sea necesario para facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales y la cooperación policial y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer normas mínimas mediante directivas adoptadas con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Estas normas mínimas tendrán en cuenta las diferencias entre las tradiciones y los sistemas jurídicos de los Estados miembros [...] La adopción de las normas mínimas contempladas en el presente apartado no impedirá que los Estados miembros mantengan o instauren un nivel más elevado de protección de las personas.

<sup>62</sup> <http://liberlex.com/archivos/atestados.pdf> consulta realizada el 7 de mayo de 2020

<sup>63</sup> Barón Jaqués, L, Acceso al atestado policial: expresión del derecho fundamental a la asistencia letrada al detenido, Abogacía Española, Publicado en: Blogs de Derecho Penitenciario, 13 de enero de 2016, en: <https://www.abogacia.es/publicaciones/blogs/blog-derecho-penitenciario/acceso-al-atestado-policial-expresion-del-derecho-fundamental-a-la-asistencia-letrada-al-detenido/> consulta realizada el 10 de mayo de 2020.

personas <sup>64</sup>y/o ha hechos que no tienen que ver con las razones concretas de la detención, pero que ambas se encuentran relacionados dentro de la investigación para justificar la detención preventiva.<sup>65</sup>

La determinación de cuáles son los elementos del contenido esencial, es transcendental, ya que de ellas dependen la justificación de la medida de la detención. Y, deberán de ser puestas a disposición al detenido como hemos explicado anteriormente en el apartado, por escrito y de forma clara, con un lenguaje comprensible asimismo de que deberá ponerse a disposición del detenido o su abogado de forma inmediata, debiéndole de dar la posibilidad de que si lo llegase a pedir, se le dé acceso a los mismos.<sup>66</sup>

## **II.2 Entrevista reservada del detenido con su letrado.**

El derecho de entrevistarse reservadamente del detenido con su letrado, especialmente el poder reunirse el detenido y su letrado previamente a la declaración en sede policial, es otro de los derechos que ha sufrido modificaciones en la Reforma de la LECrim del 2015 para poder garantizar la defensa del sospechoso y detenido en el proceso jurisdiccional penal, porque es gracias a esta interacción que existe en el proceso penal de ambos sujetos, cuando el abogado le aconseja, le recomienda y le asesora técnicamente cuando el detenido se ve protegido jurisdiccionalmente evitando así que su desconocimiento de los derechos que le asisten pueda llegar a ocasionarle perjuicio a su persona declarándose culpable, y viendo entonces como se encuentra en un estado de indefensión total.

Anteriormente a la Reforma de la LECrim, no estaba reconocido el derecho a una entrevista previa a la declaración policial, ya que solamente se encontraba regulada

---

<sup>64</sup> En la STC 21/ 2018, los agentes de policía, tuvieron conocimiento del delito por las declaraciones que realizaron los ocupantes de los vehículos de la zona, los cuales indicaron que en un parque colindante se estaba produciendo una reyerta entre jóvenes, así como que uno de los jóvenes arrojaba un machete de 36 centímetros de hoja mientras huía de la escena del crimen mientras eran perseguidos por la policía.

<sup>65</sup> El art.292 de la LECrim impone a la Policía Judicial, cuando intervenga en el esclarecimiento de un hecho que presente caracteres de delito, la obligación de redactar un atestado en el que han de consignar las diligencias que practiquen, en el cual “especificarán con la mayor exactitud los hechos por ellos averiguados, insertando las declaraciones e informes recibidos y anotando todas las circunstancias que hubiesen observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito”

<sup>66</sup> La STC 21/2018 de 5 de Marzo, “En el momento en que es posible solicitar acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención el atestado no ha sido nunca completado, pues la propia declaración policial del sospechoso aun no se ha producido, lo que permite de nuevo, diferenciar entre el contenido del atestado y aquellos elementos de él que, por objetivar las razones de la detención, han de ser accesibles para el detenido.”

dicha entrevista por el art. 520 de la LECrim una vez que el detenido hubiera finalizado las diligencias en las que estaba interviniendo. Fue a raíz de las modificaciones que realizó la LO 13/2015 de 15 de Octubre, cuando se redactó de nuevo el artículo 775, el 118, 520, y se creó el apartado del artículo 509 redactándose así la existencia de dicho derecho en la LECrim.

Ahora bien, en este derecho del investigado y del detenido, debemos hacer una matización, ya que, estaremos en presencia del art. 118 cuando se trate de imputado o investigado, y en presencia del art. 520 cuando se trate de detenido. Y, basándonos en el título de nuestro trabajo de Final de Grado ( TFG) sólo se comentará la nueva redacción del art. 520.

El art. 520.6.d) LECrim: “Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 527 LECrim”.

Por otra parte, el art. 520.7 de la LECrim establece la confidencialidad de las actuaciones siguiendo las reglas mínimas establecidas para los Estados miembros de la Unión Europea del art. 4 “Confidencialidad” de la Directiva 2013/ 48/UE. Ahora bien, como hemos dicho anteriormente en este TFG, la Unión Europea establece unas pautas que deben seguirse, pero esto no impide que los Estados miembros realicen una regulación más extensiva de dichos derechos en cuanto a su regulación. Esto es lo que sucede en este supuesto, a raíz de la LO 13/ 2015 de 5 de Octubre se formuló la excepcionalidad a dicha confidencialidad, del art. 509 de la LECrim para las personas detenidas.

Siendo posible la incomunicación entre el abogado y su representado cuando se den las circunstancias para las personas detenidas en el art.509 apartado 4 de la LECrim.

### **La nueva regulación de la incomunicación, la excepción a la regla general.**

Esta excepción de la regla general, actualmente se encuentra regulada en el art. 509 de la LECrim, dicho artículo fue modificado a raíz de la reforma que tuvo la LECrim por la LO 13/2015, de 5 de Octubre, para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

El plazo máximo al igual que la regulación de la LECRim anterior a la reforma, sigue siendo de cinco días de posibilidad de incomunicación, con oportunidad de realizar una prórroga de otros cinco días siempre y cuando sean delitos de terrorismo o hayan sido cometidos por más de dos personas de forma organizada. Y, al ser una medida de carácter excepcional se deberá de adoptar por resolución judicial, siendo requisito imprescindible que esté fundamentada. Y a diferencia con la anterior redacción de la LECRim, una vez haya expedido el plazo máximo de los 10 días no podrá volver a realizarse otro plazo de incomunicación a la persona detenida que ya se le haya impuesto esta medida.<sup>67</sup>

Los presupuestos para la adopción de esta medida se encuentran en el art. 509 de la LECRim, siempre que concurren alguna de estas circunstancias: primero, evitar graves consecuencias que puedan poner en peligro la vida, la libertad o la integridad de una persona, o segundo, que los jueces de instrucción deban actuar para evitar daños graves al proceso penal.

Las garantías para controlar la situación de los detenidos en esta medida de excepción de detención incomunicada son, la más destacable por su importancia es que el juez deberá velar en todo momento por el estado y los derechos del detenido, y para ello deberá recabar toda la información que crea necesaria.<sup>68</sup>

Las consecuencias y efectos de la medida se encuentran en el art. 527 de la LECRim, y en el art. 510 también de dicho cuerpo legal. Con la nueva reforma del art. 527 de la LECRim es el mismo juez quien decide cuales los derechos que le serán privados al detenido, salvo a los elementos esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención, y deberá de acordarse por auto.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> OTAMENDI ZOZAYA, F, *Las últimas reformas de la Ley de Enjuiciamiento criminal. Una visión práctica tras un año de vigencia*, Dykinson, Madrid, 2017 p.64

<sup>68</sup> Procedimiento del Habeas corpus, art. 3 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de Mayo, puede ser iniciado por el juez del lugar donde esté la persona detenida para la tutela judicial de los derechos de la persona privada de libertad.

<sup>69</sup> Art. 527 LECrim:” En los supuestos del artículo 509, el detenido o preso podrá ser privado de los siguientes derechos si así lo justifican las circunstancias del caso: a) Designar abogado de confianza; b) Comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el ministerio Fiscal y el Médico Forense; c) Entrevistarse reservadamente con su abogado; d) Acceder él o su abogado a las actuaciones, salvo a los elementos esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención.”

### **II.3 Derecho a ser asistido por un intérprete, o a la traducción del texto cuando no comprenda el castellano o la lengua oficial de actuación de que se trate.**

Para responder a esta cuestión debemos acudir a la Directiva 2010/ 64/UE del Parlamento europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010 relativa al derecho de interpretación y traducción en los procesos penales, y a la LO 5/ 2015, de 27 de Abril que la traspone en nuestro ordenamiento, y que modifica los artículos de la LECRim, añadiendo a dicho cuerpo legal los artículos 123 a 127.

La pertenencia a la UE lleva consigo obligaciones legales por el hecho de cumplir con lo previsto en el Derecho de la Unión, y en este apartado en donde nos encontramos, se realizó una auténtica reforma de la legislación procesal española, porque hasta ahora no se había llevado a su legislación en la LECrim. Siendo necesario que se reconozca expresamente dichos derechos para que lo haya limitaciones ni restricciones de ningún modo por el Estado a los detenidos, para así garantizar un juicio justo acorde a las garantías establecidas por la Constitución en su artículo 24.

La Directiva nos hace una distinción estableciendo dos artículos diferentes, el dos para “el derecho de interpretación”, y el tres para “ el derecho de traducción de documentos esenciales”. Existiendo únicamente la posibilidad de renunciar al derecho de traducción en el art.3.8 siempre y cuando el sospechoso o acusado haya recibido asesoramiento jurídico previo, le hayan comunicado las consecuencias de su renuncia, y siempre que esta sea inequívoca y voluntaria.

Estos dos derechos, tanto el derecho de asistencia de intérprete como el derecho a la traducción son gratuitos aunque las sentencias dicten condena para el detenido como bien estableció el Tribunal de Derechos Humanos, ( en adelante TEDH)<sup>70</sup> Y siguiendo la pauta establecida por el TEDH la Directiva 2010/ 64/ UE en su artículo 4 tuvo que plasmar dicho requisito de gratuidad de la siguiente manera: “ Los Estados miembros sufragarán los costes de traducción e interpretación resultantes de la aplicación de los artículos 2 y 3 con independencia del proceso”.

No contempla el derecho a la traducción como un derecho absoluto, como sí lo hace con el derecho al intérprete, dónde en el art. 3.8 establece cuando se puede renunciar al derecho de traducción, como se ha dicho anteriormente, siendo posible su renuncia

---

<sup>70</sup> STEDH de 28 de noviembre de 1978 ( asunto Luedicke, Belkacem y Koc c. Alemania) párr.46

cuando el detenido haya obtenido asesoramiento jurídico previo o de otra forma se le haya dado la información de que sucede con las consecuencias de su renuncia. Esta renuncia tendrá carácter inequívoca y de carácter voluntario.<sup>71</sup>

El derecho a la traducción y al intérprete se trata de un derecho instrumental y accesorio. En nuestro ordenamiento, y más concretamente en nuestra LECrim le corresponde a toda persona detenida o presa, mención expresa del art. 520.2.h) “Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate”.

Los derechos que atienden a la persona que no hable o no entienda el castellano se encuentran regulados de forma general en el mismo art. 123 de la LECrim, extrayendo las siguientes conclusiones:

- El derecho a ser asistido de un intérprete que conozca la lengua, será en todas las actuaciones que sea obligatoria la presencia de dicho imputado.
- Le corresponde también en todas las conversaciones que mantenga con su abogado. Además el intérprete deberá de ser confidencial respecto a estas.
- Derecho a la traducción de toda documentación esencial para garantizar su ejercicio de defensa. Estas podrían ser sustituidas excepcionalmente por un resumen oral de la lengua que hable el detenido.

La traducción se deberá llevar a cabo en un plazo razonable y desde que se acuerde por parte de un Tribunal o Juez o del Ministerio Fiscal quedarán en suspenso los plazos procesales que sean de su aplicación ( art.123.4 LECrim)

La asistencia del intérprete se podrá prestar a través de cualquier medio de telecomunicación, a no ser que sea preceptiva la asistencia física de dicho intérprete por parte del Tribunal, del Juez o del Fiscal para salvaguardar los derechos del acusado.

Como excepción a la Directiva 2010/ 64/UE, en el art.126 de la LECrim se posibilita la renuncia de los derechos del art. 123 siempre y cuando no correspondan con el derecho a intérprete. Para que dicha renuncia sea válida deberá de ser libre y expresa, y

---

<sup>71</sup> VIDAL FERNANDEZ,B, <<Interpretación y aplicación del derecho a la traducción de documentos esenciales para los Tribunales penales en España>>”,*Revista de Estudios Europeos*, ISSN 2530-9854,nº1,2019 p. 83

deberá realizarse después que al imputado o acusado se le haya dado un mínimo de asesoramiento sobre las consecuencias de su renuncia.

No debemos olvidarnos que estos derechos de asistencia de intérprete y a la traducción del proceso penal se encuentran formulados como derechos fundamentales en los Tratados Internacionales del Convenio Europeo de Derechos Humanos( CEDH), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)

En el CEDH, resaltamos el artículo 5.2 donde formula “ Toda persona detenida previamente debe ser informada, en el más breve plazo y en una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella”: y el art.6.3.e) que dice “ Todo acusado tiene el derecho a ser asistido gratuitamente de un intérprete sino comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia.”

En el PIDCP, el derecho al intérprete se recoge en el art. 14.3 donde establece las garantías mínimas de la persona acusada durante el proceso, resaltando el apartado a) “a ser informada sin demora en un idioma que conozca”; y el apartado f) “ a ser asistida por un intérprete si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal”.

Al leer la Directiva 2010/ 64/UE de 22 de Marzo, y los artículos de la LECrim a primera vista podemos hacer una comparación en cuanto al modo en el que debe de ser entregada la traducción al sospechoso. En la Directiva se nos habla de calidad<sup>72</sup>, la cual va unida al Derecho de Defensa, <sup>73</sup>puesto que cuánto mejor entienda los hechos y las circunstancias de su detención, es decir, los cargos que se le imputan, mejor podrá realizar su defensa en el proceso, mientras que, en el caso de la LECrim, más que calidad se requiere la exactitud. La exactitud es la inexistencia del error, siendo

---

<sup>72</sup> Art.3.9 de la Directiva 2010/64/UE “ La traducción facilitada con arreglo al presente capítulo tendrá una calidad suficiente para salvaguardar la equidad del proceso, garantizando en particular que el sospechoso o acusado tiene conocimiento de los cargos que se le imputan y está en condiciones de ejercer el derecho de defensa.

<sup>73</sup> Jurisprudencia del TEDH (Asunto Kamasinski c. Austria STEDH, 19 de Diciembre de 1989, asunto Cuscani c. Reino Unido, STEDH, de 24 de Septiembre de 2002, asunto Hermi c.Italia, STEDH, de 18 de Octubre de 2006 entre otros) ha declarado que la obligación de los Estados no se limita al nombramiento de un intérprete, sino que se extiende a un cierto grado de control sobre la adecuación o calidad de la interpretación, es decir, a procurar que los intérpretes o traductores sean suficientemente cualificados.

imposible dudarlo y no cabrá margen a la discusión del texto que se le haya entregado traducido.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Art. 124.3 LECrim “Cuando el tribunal, el Juez o el Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de parte, aprecie que la traducción o interpretación no ofrecen garantías suficientes de exactitud, podrá ordenar la realización de las comprobaciones necesarias y, en su caso, ordenar la designación de un nuevo traductor o intérprete. En este sentido, las personas sordas o con discapacidad auditiva que aprecien que la interpretación no ofrece garantías suficientes de exactitud, podrán solicitar la designación de un nuevo intérprete.”



## **CONCLUSIONES.**

Para finalizar con el estudio del derecho de asistencia letrada al detenido, y las modificaciones de la LECRim del 2015 citaremos aquellos puntos más relevantes que han ido apareciendo a lo largo de este trabajo:

En primer lugar, el derecho a la asistencia letrada es un derecho constitucional de doble proyección constitucional. El art.17.3 de la CE reconoce este derecho al detenido en las diligencias policiales y judiciales como una de las garantías del Derecho a la libertad del art.17.1 de la CE; mientras que, el art.24.2 de la CE lo hace en el marco de la tutela judicial efectiva con las garantías del proceso debido. Y es, precisamente desde el momento de la detención o la prisión provisional cuando surge el derecho a designar abogado para el detenido, la cuál como máximo tendrá una duración de 72 horas, y una vez computadas el detenido deberá ser puesto en libertad, o en su caso, a disposición de la autoridad judicial.

En segundo lugar, la labor del abogado consiste en asesorar técnica y eficazmente al detenido. La relación entre el abogado y el detenido deberá basarse fundamentalmente en la confianza, aunque el abogado deberá respetar las instrucciones que le dicte su cliente, éste tendrá un cierto margen de libertad en sus actuaciones siempre en función del beneficio y de los intereses de su cliente.

En tercer lugar, las funciones del abogado se encuentran reguladas en el art.520.6 de la LECrim, y suponen en definitiva, la no indefensión de su cliente ya que el abogado velará en todo momento porque se respeten los derechos fundamentales y libertades del detenido durante el proceso, así como que se respeten los principios de contradicción e igualdad de partes.

En cuarto lugar, la regulación de la UE de estos derechos supuso una cooperación por parte de los distintos Estados miembros cuyo objetivo primordial era conseguir un espacio de libertad, seguridad y Justicia que ya había sido consagrado en un primer momento por el Tratado de Lisboa.

La importancia que tuvo en nuestro ordenamiento la LO 13/2015 de 5 de octubre, y la LO 5/2015, de 27 de abril, ambas más que necesarias para poder adaptarse a la nueva realidad que había sido dictada por la Unión Europea.

La LO 13/2015, de 5 de Octubre , modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, y además necesaria para poder trasponer la Directiva 2013/48/ UE, de 22 de Octubre de 2013 reguladora del derecho a entrevistarse reservadamente del detenido con su letrado, aunque a modo de excepción se regula también la detención incomunicada para supuestos de terrorismo, o hayan sido cometidos por dos o más personas, tendrá una duración de cinco días siendo prorrogables en otros cinco días más, y el juez deberá velar en todo momento por los derechos y el estado del detenido. Gracias a esta Ley Orgánica se modificaron los arts. 118, 509, 520 y 527 de la LECrim.

La LO 5/2015, de 27 de abril, traspuso la Directiva 2010/64/UE, de 20 de Octubre de 2010, relativa al Derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de Mayo de 2012, relativa al Derecho a la información en los procesos penales por la que se modificaron la LECRim y la LOPJ. Se introdujeron los artículos del 123 al 127 de la LECRim relativo al derecho de interpretación y traducción en los procesos penales, el art. 775 LECRim sobre la información de derechos al investigado en el Juzgado en su primera comparecencia, y otra vez sobre el art. 520 del derecho de la asistencia letrada al detenido.

## **BIBLIOGRAFIA.**

- ARMANTA DEU.T, *Lecciones de Derecho procesal penal*, nº11 Marcial Pons, Madrid, 2018
- PERELLO DOMENECH I, << Sobre el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas >>, *Jueces para la democracia*, ISSN, 1133-0627, Nº39, 2000
- CALDERON CUADRADO M.P, << El derecho a un proceso público con todas las garantías (aspectos controvertidos y Jurisprudencia del Tribunal Constitucional) >> *Cuadernos del Derecho público*, 1997-2007, nº10, pp.1-26
- ANTONIU ,G, Y COSTICA,B, *Diccionario de Derecho penal y de procedimiento penal*, Ed.Hamangiu, Bucarest, 2011
- BUJOSA VADEL,L << Imputación y detención policial: perspectiva española >>, *Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política*, ISSN 0719-2150, vol.3, nº2, pp.11-35
- FREIXES SANJUAN, T, Y REMOTTI CARBONELL, J.C, *El derecho a la libertad personal, análisis de constitución, legislación, Tratados internacionales y Jurisprudencia ( Tribunal Europeo y Tribunal constitucional )* , Ed.Promociones y publicaciones universitarias PPU, España, 1993
- <https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/utilizar-medios-prueba-pertinentes-382082738>, 5/04/2020
- [https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkNDczMjQ7Wy1KLizPw8WyMDQ3OgmAFIIDOt0iU\\_OaSyINU2LTGnOBUA8eL9LTUAAAA=WKE#I401](https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkNDczMjQ7Wy1KLizPw8WyMDQ3OgmAFIIDOt0iU_OaSyINU2LTGnOBUA8eL9LTUAAAA=WKE#I401) 8/04/2020
- MIRA ROS, C, << El derecho del acusado a defenderse por sí mismo a la luz de la Constitución Española y de los instrumentos Internacionales ratificados por España >>. *Revista General de Derecho Procesal*, ISSN-e 1696-9642, núm. 15, 2008. Pp.1-20
- Asistencia al detenido en la sede policial  
<https://alvarezabogadostenerife.com/2019/02/asistencia-detenido-sede-policial-judicial/> 17/07/2020
- GARRIDO CARRILLO, FJ Y GAGGIANI V., << El plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de los sospechosos o acusados en el proceso penal y el programa de Estocolmo: Hacia una Europa de la ley y de los Derechos fundamentales en el ELSS >>, *comunicación presentada en el Congreso sobre la Convergencia entre los procesos civil y penal, ¿ Una buena dirección? Análisis comparado*, Girona, enero de 2012
- ¿ Qué se entiende por documentos esenciales para impugnar la legalidad de la detención? <https://elderecho.com/que-se-entende-por-documentos-esenciales-para-impugnar-la-legalidad-de-la-detencion> 15/04/2020
- EL ATESTADO. <https://teleoposiciones.es/wp-content/uploads/2019/10/TEMA-27-EL-ATESTADO.pdf> 10/05/2020
- El acceso a los atestados policiales: a las vueltas con las garantías del derecho de defensa en el proceso penal español. <http://liberlex.com/archivos/atestados.pdf> 11/05/2020

- Barón Jaqués, Lourdes, Acceso al atestado policial: expresión del derecho fundamental a la asistencia letrada al detenido, Abogacía Española, Publicado en: Blogs de Derecho Penitenciario, 13 de enero de 2016, en: <https://www.abogacia.es/publicaciones/blogs/blog-derecho-penitenciario/acceso-al-atestado-policial-expresion-del-derecho-fundamental-a-la-asistencia-letrada-al-detenido/> 10/05/2020
- OTAMENDI ZOZAYA, F, *Las últimas reformas de la Ley de Enjuiciamiento criminal. Una visión práctica tras un año de vigencia*, Dykinson, Madrid, 2017
- VIDAL FERNANDEZ,B, <<Interpretación y aplicación del derecho a la traducción de documentos esenciales para los Tribunales penales en España>>”,*Revista de Estudios Europeos*, ISSN 2530-9854,nº1,2019, pp-76-96